



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

INFORME SECRETARIAL

Barranquilla, 07/12/2020

Radicado	08001-33-33-014-2018-00212-00
Medio de control o Acción	Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante	Electricaribe S.A. E.S.P.
Demandado	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD
Juez (a)	Guillermo Osorio Afanador

INFORME
Señor juez: paso a su despacho el expediente de la referencia, informándole que se encuentra vencido el término de traslado de la demanda y se presentaron excepciones previas con la contestación de la demanda. De igual forma, el apoderado de la entidad demandada allegó memorial de renuncia del poder.

PASA AL DESPACHO
Para resolver Excepciones Previas.

CONSTANCIA
Fijación de las excepciones propuestas por el demandado.-

ALBERTO LUIS OYAGA LARIOS
SECRETARIO

Ultimo Digitalizado número cuaderno	Folio y de	Firma de Revisado



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Barranquilla, siete (07) de diciembre de dos mil veinte (2.020).

Radicado	08001-33-33-014-2018-00212-00
Medio de control o Acción	Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante	Electricaribe S.A. E.S.P.
Demandado	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD
Juez (a)	Guillermo Osorio Afanador

CONSIDERACIONES

Visto el informe secretarial que antecede, advierte el despacho que en el proceso de la referencia se encuentran vencidos los términos de traslado de la demanda previstos en el artículo 199 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 612 del Código General del Proceso, e igualmente vencido el término de traslado señalado en el artículo 172 del CPACA, que tornaría necesario fijar fecha para la celebración de la audiencia inicial, de acuerdo a lo señalado en el artículo 180 ibídem.

No obstante, ha de tenerse en cuenta que en virtud de la declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, con el fin de garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia, defensa y seguridad jurídica de las partes y además el derecho a la salud de los servidores judiciales, el Gobierno Nacional profirió el Decreto 806 del 4 de junio de 2020¹, el cual respecto a la resolución de excepciones previas en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, estableció:

“Artículo 12. Resolución de excepciones en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. De las excepciones presentadas se correrá traslado por el término de tres (3) días en la forma regulada en el artículo 110 del Código General del Proceso, o el que lo sustituya. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre ellas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en las excepciones previas.

Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juzgador las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de esta las practicará. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión.

Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva. se tramitarán y decidirán en los términos señalados anteriormente.

La providencia que resuelva las excepciones mencionadas deberá ser adoptada en primera instancia por el juez, subsección, sección o sala de conocimiento. Contra esta decisión procederá el recurso apelación, el cual será resuelto por la subsección, sección o sala del tribunal o Consejo de Estado. Cuando esta decisión se profiera en única instancia por los tribunales y Consejo de Estado se decidirá por el magistrado ponente y será suplicable.”

¹ 1 “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Y en el que a su vez señaló que:

“Artículo 16. Vigencia y derogatoria. El presente decreto legislativo rige a partir de su publicación y estará vigente durante los dos (2) años siguientes a partir de su expedición.”

Respecto a la oportunidad y trámite de las excepciones previas, el artículo 101 del citado estatuto procesal, establece:

“(…)

Las excepciones previas se tramitarán y decidirán de la siguiente manera:

1. Del escrito que las contenga se correrá traslado al demandante por el término de tres (3) días conforme al artículo 110, para que se pronuncie sobre ellas y, si fuere el caso, subsane los defectos anotados.
2. El juez decidirá sobre las excepciones previas que no requieran la práctica de pruebas, antes de la audiencia inicial, y si prospera alguna que impida continuar el trámite del proceso y que no pueda ser subsanada o no lo haya sido oportunamente, declarará terminada la actuación y ordenará devolver la demanda al demandante.

Cuando se requiera la práctica de pruebas, el juez citará a la audiencia inicial y en ella las practicará y resolverá las excepciones. (…).”

De conformidad con la disposición normativa en mención, las excepciones previas que no requieran la práctica de pruebas se deben resolver antes de la celebración de la Audiencia Inicial, y si prospera alguna que impida continuar con el trámite del proceso se deberá declarar terminada la actuación. De igual forma contempla que cuando se requiera la práctica de pruebas, el juez citará a la diligencia y en ella procederá a la práctica de pruebas y a resolver sobre las exceptivas planteadas.

- De las Excepciones Propuestas

El despacho constata en la contestación de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que fueron propuestas las excepciones previas que titula; (i) **No se demanda el acto ficto surgido de la declaratoria del silencio administrativo positivo;** (ii) **Falta legitimación en la causa de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios respecto de la pretensión de restitución de las sumas pagadas por Electricaribe a título de sanción con los intereses corrientes;** no obstante, en un aparte de dicha contestación - por fuera del acápite “otras excepciones” - muy resumidamente advierte esta agencia judicial que el apoderado de la entidad demandada estima se ha configurado la excepción de inepta demanda, sin embargo, esta carece de amplias y argumentadas razones y hechos que funden su sentir, que permitan estimar la declaratoria de la misma, siquiera de oficio.

Para el presente asunto, al evidenciarse que efectivamente se presentaron excepciones previas por la parte demandada, el despacho atendiendo la citada disposición procederá a resolverlas, advirtiendo en éste caso en particular, sin la necesidad de darle aplicación al inciso 1° del Art. 12 del Decreto 806 de 2.020, puesto que al haberse corrido traslado a las excepciones el 10 de diciembre de 2.019, en virtud del Parágrafo 2° del Art. 175 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, conforme a los principios de la Administración de Justicia, y acorde a los dispuestos dentro de la Ley 1437



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

de 2.011, resultaría dilatorio y carente de eficacia revivir una oportunidad procesal que feneció y en la que claramente se garantizó plenamente el derecho a la defensa y contradicción de la entidad demandante.

Pasa el Despacho al estudio de las excepciones propuestas, así:

- **No se demanda el acto ficto surgido de la declaratoria del silencio administrativo positivo.**

La parte demandada sustenta esta excepción de la forma que a continuación se transcribe:

“El apoderado judicial confunde dos situaciones completamente autónomas, de un lado se encuentra el acto ficto positivo y por el otro la resolución de la SSPD que impone la sanción y que luego se confirma, en ningún momento ordenan a Electricaribe restituir suma alguna de dinero de lo cual surja un perjuicio patrimonial a la demandante, sino que reprochan y sancionan a la empresa prestadora de servicios por su incumplimiento del régimen de servicios públicos.

Una cosa muy distinta es que el silencio administrativo, el cual opera ipso jure sin necesidad de un acto que lo reconozca, se traduzca en una positivización de las peticiones del usuario, por lo tanto la presunta ilegalidad de este acto ficto no puede endilgarse a otro acto como aquí lo pretende el demandante, puesto que debió demandar directamente el acto presunto.

Si el acto ficto es presuntamente ilegal, el actor debió demandar dicho acto que es completamente autónomo e independiente a las decisiones de la SSPD, ya que el acto en sí mismo sigue vigente y surtiendo efectos hasta que no se le demande”

Se anticipa el despacho en señalar que declarará no probada la excepción propuesta, teniendo en cuenta lo siguiente:

Con las pretensiones de la demanda, lo que se busca es declarar que Electricaribe no está obligada a pagar el valor de las sanciones impuestas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mas no se está pretendiendo desconocer o anular los efectos de la declaratoria del silencio administrativo positivo, frente a los reclamos presentados por los usuarios.

Es por esta razón, que en el acápite de pretensiones, el demandante solo busca la nulidad del artículo 1 de cada una de las resoluciones por medio de las cuales la demandada impuso las sanciones que establece el artículo 81 de la Ley 142 de 1994.

Así las cosas, se tiene el acto ficto surgido de la declaratoria del silencio administrativo positivo, no es necesario incluirlo en la demanda, por lo tanto, esta excepción no prospera.

- **Falta legitimación en la causa de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios respecto de la pretensión de restitución de las sumas pagadas por Electricaribe a título de sanción con los intereses corrientes e inepta demanda por falta de requisitos formales.**

La SSPD manifiesta frente la legitimación en la causa por pasiva que:



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

“El dinero recaudado por cumplimiento de las sanciones impuestas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por configuración del silencio administrativo positivo dentro del régimen de servicios públicos domiciliarios, no son de propiedad de la Superservicios, fueron destinados y hacen parte del Patrimonio Autónomo Fondo Empresarial de la SSPD, ordenado por la Ley 812 de 2003, ratificado por las leyes 1151 de 2007 y 1450 de 2011, actualmente administrado por la Fiduciaria Bogotá, a quien como vocera del patrimonio autónomo le compete, de ser ordenado en la sentencia, la devolución de las sumas que reclama el demandante, y no a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, probándose de esta forma el no cumplimiento del presupuesto procesal de la legitimación en la causa en cabeza del demandado frente a la mencionada pretensión. (...)

Es entonces la Fiduciaria Bogotá S.A. como vocera del Patrimonio Autónomo Fondo Empresarial de la SSPD quien debe ser vencida en juicio a fin de acatar la eventual resarcitoria solicitada por el demandante y no la Superservicios.”

Por su parte, frente a la ineptitud de la demanda, esta fue sustentada así:

“se alega la excepción previa de inepta demanda por falta de los requisitos formales, respecto de la patrimonio autónomo denominado Fondo Empresarial de la SSPD cuyo vocera es la Fiduciaria Bogotá S.A. puesto que la pretensión resarcitoria de devolución de sumas canceladas por concepto de multa es conciliable y de su exclusiva competencia, debiendo el demandante previamente a llamarla en juicio agotar el requisito de la conciliación prejudicial.”

Al tener similares argumentos, el despacho entrará a resolver en conjunto tales excepciones bajo las siguientes razones:

Es preciso traer a colación de manera muy sucinta que la legitimación en la causa por el lado activo, es la identidad del demandante con el titular del derecho subjetivo, es decir, con quien tiene vocación jurídica para reclamarlo y, por el lado pasivo, es la identidad del demandado con quien tiene el deber correlativo de satisfacer el derecho.

Sobre este tema es necesario distinguir entre la legitimación de hecho y la material, entendiéndose la primera como la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal; es decir es una relación jurídica nacida de la atribución de la conducta, en la demanda, y de la notificación de ésta al demandado.

La Legitimación material en la causa alude, por regla general, a situación distinta cual es la participación real de las personas en el hecho origen de la formulación de la demanda, independientemente de que dichas personas o hayan demandado o que hayan sido demandadas.

Descendiendo al caso que nos ocupa, se encuentra verificada la legitimación de hecho, pues, en la demanda a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, le fueron endilgadas por el actor, las causales de nulidad de los actos administrativos demandados; de allí que hubiere sido citada como demandada y debidamente notificada.

Ahora bien, para entrar a determinar la legitimidad en la causa por pasiva material, se tiene que la Ley 812 de 2003, facultó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,

Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

para constituir un Fondo Empresarial como Patrimonio Autónomo, el cual ha sido ratificado por las Leyes 1151 de 2007 y 1450 de 2011, actualmente administrado por la Fiduciaria Bogotá S.A.

De acuerdo con la Ley 1450 de 2011, el Patrimonio Autónomo Fondo Empresarial apoya entre otros, el pago de las actividades profesionales requeridas para prestar apoyo en áreas financieras, técnicas, legales y logísticas a la SSPD.

La relación que tiene la Fiduciaria de Bogotá con la SSPD, es como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Fondo Empresarial con la finalidad primordial de la eficaz administración, inversión y destinación de sus recursos, conforme a las instrucciones que le sean impartidas por la dependencia a quien corresponda, de la citada entidad demandada.

Así las cosas, al establecer que la Fiduciaria solo tiene una obligación de medio, esta excepción se declarará no probada, ya que el ordenador del gasto del Patrimonio Autónomo Fondo Empresarial, es el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, y en consecuencia, será este quien está obligado a dar cumplimiento a una posible condena que pueda ser dictada en el proceso de la referencia, si hubiere lugar a ella; así mismo, sin mayor análisis, al no ser sujeto pasivo dentro del proceso no puede considerarse que deba haberse convocado a una conciliación prejudicial.

De otro lado el informe secretarial advierte del memorial presentado por el doctor José David Morales Villa, en el que manifiesta renunciar al poder otorgado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con la respectiva constancia de haber comunicado a la Oficina Jurídica de la entidad demandada, dicha intención, con lo cual se encuentra verificada la exigencia de que trata el parágrafo 4º del artículo 76 del CGP, razón por la que se aceptará la renuncia presentada por el mencionado abogado.

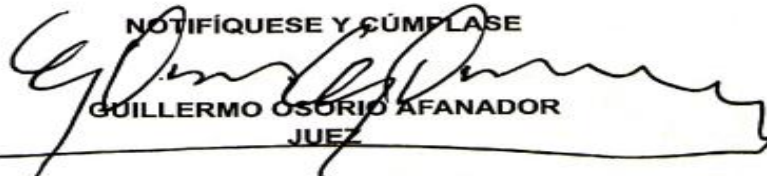
En mérito de lo expuesto, el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Barranquilla,

RESUELVE:

PRIMERO: Decláranse no probadas las excepciones que se denominan “No se demanda el acto ficto surgido de la declaratoria del silencio administrativo positivo.”, “Falta legitimación en la causa de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios respecto de la pretensión de restitución de las sumas pagadas por Electricaribe a título de sanción con los intereses corrientes” e “Inepta demanda por falta de requisitos formales”, propuestas por la entidad demandada, de conformidad con lo expuesto

SEGUNDO: ACÉPTASE la renuncia presentada por el doctor **José David Morales Villa**, como apoderado de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, dentro del presente medio de control.

TERCERO: Una vez ejecutoriada esta providencia, por secretaría ingrese el expediente al Despacho para continuar con la etapa procesal correspondiente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GUILLERMO OSORIO AFANADOR
JUEZ



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

NOTIFICACION POR ESTADO
LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO
ELECTRONICO

N° 138 DE HOY 09/12/2020 A LAS 8:00 A.M.

ALBERTO LUIS OYAGA LARIOS
SECRETARIO

SE DEJA CONSTANCIA QUE SE LE DIO CUMPLIMIENTO AL
ARTICULO 201 DEL CPACA